



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-002-2019-00133-01 (O2-22-014)
Demandante: OSCAR DARIO GIRALDO MEJIA
Demandados: MAFRICCION S.A. Y COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No.143 DEL 18 DE JULIO DE 2022
Asunto: COTIZACIÓN ESPECIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO
OBLIGACIONES EN MORA A CARGO DEL EMPLEADOR

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022), **la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, resuelve el **Recurso de Apelación** impetrado por COLPENSIONES, MAFRICCION S.A. y el demandante, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA en contra de COLPENSIONES y MAFRICCION S.A. conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-002-2019-00133-01 (O2-22-014).

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, *“Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”*, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJIA, actuando por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES y MAFRICCION S.A., con la cual pretende se condene a MAFRICCION S.A. a reconocer y pagar en favor de Colpensiones las cotizaciones especiales consagradas en el Decreto 2090 de 2003, a Colpensiones reconocerle y pagarle la pensión especial de alto riesgo, con las mesadas adicionales; al

pago de intereses de mora o la indexación, los perjuicios por la omisión en el pago de las cotizaciones adicionales a cargo de MAFRICCION S.A. y las costas del proceso.

Como fundamento fáctico de su petitum, expresa que labora al servicio de la empresa MAFRICCION S.A desde 1984, estando expuesto a sustancias cancerígenas como el Asbesto y a altas temperaturas, por encima de los valores límites permisibles, debiendo realizar el mantenimiento de las calderas con temperaturas superiores a los 150°C. Anota que el 14 de marzo de 2018 solicitó a Colpensiones el reconocimiento y pago de la pensión especial de alto riesgo y dicha entidad le requirió unas pruebas documentales; que solicitó las mismas a través de derecho de petición a MAFRICCION S.A. la que dio una respuesta superficial y debió acudir por tanto a la acción de tutela para obtener los certificados relativos a sus labores y exposición en sus labores; que la empresa demandada fabrica productos con asbesto y no ha realizado el pago de la cotización especial, y al final, señala que ha cotizado un total de 1754 semanas en toda su vida laboral.

1.1. Trámite de Primera Instancia

La demanda se admitió el 27 de marzo de 2019 (carp.01, doc. 03, pág. 98). COLPENSIONES, fue notificada el 06 de mayo de (carp.01, doc. 03, pág. 99 a 100), y presentó contestación el 27 del mismo mes y año (carp.01, doc. 03, pág. 108 a 114), mediante apoderada judicial, la que se opuso a las pretensiones de la demanda con el argumento de que no se le puede indilgar responsabilidad en la omisión de efectuar cotizaciones especiales, siendo igualmente improcedente el reconocimiento de intereses de mora, dado que al no existir obligación de reconocer pensión especial de vejez por cotización de alto riesgo no hay lugar a los mismos. En su defensa, propuso como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, buena fe, imposibilidad de condena en costas, prescripción, improcedencia de intereses de mora y compensación.

MAFRICCION S.A., presentó contestación (carp.01, doc. 06) en la cual indicó que el demandante se vinculó a laborar el 29 de enero de 1988, negando que este se hubiera encontrado expuesto a sustancias cancerígenas como el asbesto, ni a altas temperaturas; que desde 1996 fabrican productos de mezcla metálica y desde el 2002 producen productos libres de asbesto y desde el 2018 no fabrican ningún producto con asbesto; de este modo, se oponen a todas las pretensiones de la demanda y proponen como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación de realizar aportes a alto riesgo, inexistencia de exposición a una sustancia comprobadamente cancerígena, inexistencia de perjuicio o daño, buena fe, falta de causa para demandar, pago, compensación y prescripción.

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia se dirimió en primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, el que el 14 de diciembre de 2021 (carp.01, doc. 27 a 30), mediante sentencia con la que declaró que el demandante desarrolló al servicio de MAFRICCION S.A actividades de alto riesgo durante los periodos comprendidos entre el 18 de junio de 1984 al 28 de julio de 1987 y del 28 de enero de 1988 al 30 de diciembre de 2018; ordenó a la empresa demandada al pago de los puntos adicionales en la cotización de alto riesgo; ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la pensión de vejez por actividad de alto riesgo al señor Oscar Darío Giraldo Mejía a partir del día siguiente al que haya reportado la última cotización en pensiones; absolvió a las demandadas de las pretensiones de reconocimiento de intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y de perjuicios a cargo de MAFRICCION S.A., al tiempo que condenó en costas a la empresa demandada, pero no así a Colpensiones.

1.3. Recurso de Apelación

La decisión antes descrita fue objeto del recurso de alzada por el apoderado judicial de la parte demandante en cuanto a la fecha de reconocimiento de la pensión de vejez, al no habérsele aplicado para el reconocimiento de la pensión el Decreto 1281 de 1994, debiéndosele descontar la edad según su densidad de semanas, adquiriendo por tanto el status a partir de los 50 años de edad. Adicionalmente indica que la pensión debe reconocerse a partir de la última cotización, a la vez de solicitar se conceda la indexación de las mesadas dejadas de pagar y se reconozcan los perjuicios a cargo de MAFRICCION S.A., pues esta incumplió con el deber de pagar las cotizaciones adicionales, razón por la cual el demandante no ha podido acceder a la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, y que por ello debe indemnizarlo reparando el daño generado con su omisión.

Igualmente, el apoderado judicial de MAFRICCION S.A., recaba la revocatoria de la sentencia de instancia al considerar que se desconoció el precedente judicial, al equiparar la clasificación de alto riesgo de la empresa con la actividad de alto riesgo desempeñada por el actor, siendo que no por el hecho de tener clasificación de riesgo 5, el demandante estuvo expuesto a sustancias altamente cancerígenas, además de que usar una sustancia altamente cancerígena en la cadena de producción, no implica que el demandante tenga contacto directo con la misma, ni obra prueba de la concentración de asbesto en la empresa, conllevando que no existe exposición a la misma, máxime cuando entregaron elementos de protección al demandante que impedían el contacto directo con el material particulado; puntualiza que a más de que no existe ninguna prueba del contacto directo con el asbesto, tampoco existió permanencia constante con el área de producción. Agrega, por

último, que el Decreto 2090 de 2003 perdió vigencia en 2014, pues aduce que si bien el Decreto 2655 de 2014 extendió la vigencia del mismo, este último decreto fue derogado por el Decreto 1650 de 2014.

Finalmente, la apoderada judicial de COLPENSIONES, apeló la decisión de instancia arguyendo que no se logró probar que la parte demandante desarrollara actividades de alto riesgo, además de que actuaron de manera legal pues no se encuentran en sus archivos elementos que den cuenta del pago de la cotización de alto riesgo o de la actividad desempeñada por el demandante.

1.4. Consulta

Toda vez que la decisión de primera instancia fue desfavorable a los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E., en igual forma se analizará integralmente la decisión en el grado jurisdiccional de consulta a su favor.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

El 24 de enero de 2022 (carp.02, doc. 02), se admitió el recurso antes descrito, y el 31 de enero de 2022 (carp.02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, por escrito, presentaran los alegatos de conclusión, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 de 2020.

MAFRICCIÓN S.A., presentó alegatos el día 07 de febrero de 2022 (carp.02, doc. 04), en los cuales solicitó se revoque la sentencia de primera instancia aduciendo que no se cumplen los requisitos para que se genere la obligación de realizar aportes por alto riesgo de conformidad con los postulados de la sentencia SL 039 de 2021; que el hecho de que el proceso productivo utilice un producto o materia prima comprobadamente cancerígena, no supone la exposición a dicha sustancia, que no hay prueba o evidencia de la existencia de concentraciones de asbesto en el aire, ni que el mismo hubiera sido inhalado por el demandante. Así mismo aduce que erradamente se concluyó en la sentencia de primera instancia que el demandante ejercía una actividad de alto riesgo por cuanto la empresa tenía actividades catalogadas como de riesgo 5 para efecto de aportes a riesgos laborales, siendo diferente la clasificación de riesgos del Decreto 1295 de 1994 y las actividades de alto riesgo estipuladas por el Decreto 2090 de 2003. Sostiene además que Colpensiones es la entidad encargada de determinar cuándo hay obligación de efectuar cotizaciones de alto riesgo, sin que exista evaluación técnica por parte del Colpensiones o ISS al respecto.

Finalmente repara que en la sentencia de instancia no se valoraron las pruebas respecto de las buenas condiciones de salud del demandante.

Dentro de la misma oportunidad COLPENSIONES presentó alegatos el 07 de febrero de 2022 (carp.02, doc. 05), en los cuales aduce que no se logró probar que las actividades realizadas por el demandante fueran actividades de alto riesgo, razón por la cual sin este requisito no cumple con las condiciones para acceder a la pensión de vejez por actividad de alto riesgo. Adujo que en el interrogatorio se incurrió en contradicciones e inconsistencias y la prueba testimonial fue débil, por lo que no se le debe conceder valor demostrativo, no siendo posible acceder al reconocimiento de la pensión especial de vejez por alto riesgo, y por contera, impetra que se revoque la sentencia de primera instancia.

Finalmente, el apoderado judicial de la parte activa, el 08 de febrero de 2022 (carp.02, doc. 06) allegó escrito mediante el cual manifestó no tener interés en presentar alegatos de conclusión.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto tanto por el extremo litigioso por activa como por Colpensiones, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, al igual que se revisará en el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES, en los puntos no fueron objeto de la alzada.

2.1. Problema Jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala, se contrae a determinar si al demandante OSCAR DARIO GIRALDO MEJIA le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez por trabajo en actividades de alto riesgo para la salud, efecto para el que habrá específicamente de establecerse si el actor desempeñó actividades de alto riesgo para la salud, y si el empleador omitió cancelar el porcentaje adicional de la cotización especial por alto riesgo, surgiendo la obligación de realizar el pago de la misma; de ser procedente lo anterior, deberá determinarse cuál es la fecha de causación y disfrute de la pensión, y si hay o no lugar al reconocimiento de perjuicios a cargo de la empresa demandada.

2.2. Sentido del fallo

La Sala confirmará la decisión de primer grado, en cuanto declaró que al señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por trabajo en actividades de alto riesgo; la orden de reconocimiento y pago de dicha pensión a cargo de Colpensiones; ordenó el pago del porcentaje adicional de la cotización y dispuso la absolución de los perjuicios reclamados, pero se modificará en cuanto a la fecha de causación del derecho y los periodos en los cuales la empleadora demandada deberá cancelar el porcentaje adicional por la actividad de alto riesgo; así mismo se adicionará, en el sentido de autorizar a COLPENSIONES E.I.C.E. descontar los aportes para el Sistema General de Salud y disponer el pago indexado del retroactivo al que hubiere lugar.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se expresa en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la controversia planteada, debe señalarse que no existe discusión sobre los siguientes supuestos fácticos: que el señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA nació el 01 de noviembre de 1964 (carp.01, doc.03, pág. 73 a 74), laboró al servicio MAFRICCION S.A., del 18 de junio de 1984 al 28 de julio de 1987 y del 28 de enero de 1988 al 01 de marzo de 2019 (carp.01, doc.03, pág. 26 y sub carp.04), y se afilió al régimen de prima media administrado por COLPENSIONES E.I.C.E. desde el 20 de junio de 1984 (carp.01, doc.03, pág. 75 a 88).

Tampoco se discute que el actor solicitó el reconocimiento de la pensión especial de vejez por trabajo en actividades de alto riesgo para la salud el 14 de marzo de 2018 (carp.01, doc.03, pág. 28), en cuya respuesta, mediante la resolución APSUB 1948 del 30 de mayo de 2018 se le requirió para que aportara unas pruebas relacionadas con la actividad de alto riesgo desempeñada (carp.01, doc.03, pág. 29 a 30).

Así mismo, advierte la Sala que pese a no ser objeto de discusión dentro del debate probatorio, se logra apreciar en la historia laboral del demandante (carp.01, sub carp.04), que este estuvo afiliado al RAIS entre septiembre de 1997 y diciembre de 2014, circunstancia que no puede dejarse de lado por este fallador plural, dada la relevancia ius fundamental de este aspecto, en torno de la discusión planteada y los puntos objeto de revisión tanto por vía de apelación como en sede del grado jurisdiccional de consulta.

2.3.1. De la actividad de alto riesgo

Los trabajos que implican la exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, son considerados como actividades de alto riesgo en virtud de la disposición legal traída desde el Acuerdo 049 de 1990, y su Decreto aprobatorio 758 de 1990, y dentro de ese contexto normativo, el asbesto ha sido reconocido como sustancia comprobadamente cancerígena a tal punto que el Convenio 162 de 1986 de la OIT, sobre uso controlado del asbesto, agente carcinógeno reconocido, fue ratificado por Colombia mediante la Ley 436 del 17 de febrero de 1998.

Ahora bien, para que proceda la pensión de vejez por actividades de alto riesgo, no basta con acreditar que la actividad de la empresa esté clasificada como de alto o máximo riesgo, es necesario que el trabajador demuestre el cumplimiento de funciones que implicaran prestar el servicio expuesto a la sustancia comprobadamente cancerígena, efecto para el que el fallador puede formar libremente su convencimiento, en tanto que la Ley no exige ninguna *solemnidad ad substantiam actus* (CSJ SL16898-2014, radicación 42344; SL925-2018, radicación 47389 SL5118-2020, radicación 61822; SL716-2021, radicación 70507).

En el sub iudice se tiene que el demandante asiente que en el proceso productivo de la empresa MAFRICCION S.A., para la cual laboró, se utilizaba como materia prima el asbesto, supuesto fáctico que es aceptado por la empresa demandada cuando al responder el libelo incoativo en el hecho segundo expresa: "si bien es cierto que en la empresa se fabricaban algunos productos con porcentajes bajos de asbesto. Esto no significa que el señor Javier (sic) se encontraba expuesto a tal compuesto". Adicionalmente en interrogatorio de parte que rindió la representante legal de MAFRICCION S.A., (min. 32:05, carp.01, doc. 27) aseveró que

desde el año 2018 no usan asbesto, pero hasta ese año algunas de las mezclas que fabricaban contenían asbesto, con lo cual no existe duda respecto a que en efecto la empresa al menos hasta el año 2018 utilizó como insumo dentro de su proceso productivo una sustancia comprobadamente cancerígena como es el asbesto, correspondiendo ahora dilucidar si el actor estuvo expuesto a la misma.

Al respecto se tiene que, según certificación otorgada por la empleadora demandada (carp.01, doc. 03, pág. 26) el demandante se desempeñó en los siguientes cargos: del 18 de junio de 1984 al 28 de julio de 1987 como operario de planta en oficios de: Prensas en frío y caliente, cortadores, Moldeadores, rectificadoras; del 28 de enero de 1988 al 11 de septiembre de 1996 como operario de planta en oficio de prensas en frío y caliente, trituradoras, moldeadoras, cortadoras; y del 12 de septiembre de 1996 a 02 de marzo de 2018 como Mecánico y eléctrico en mantenimiento general de los equipos de producción y con oficios periódicos de soldaduras y pulimientos; trabajos hidráulicos y neumáticos y control diario de la operación de la caldera.

Expresa la Representante legal de MAFRICCION S.A. (carp.01, doc. 27, min.35:50) que el demandante no participó en el proceso productivo de la empresa y por tanto no estaba expuesto al contacto con el asbesto, lo cual se contradice con la certificación antes referida en la que se detalla que antes de septiembre de 1996 sí se desempeñó como operario de planta, además de que indicó que en su labor de mecánico le realizaba mantenimiento al mezclador (min. 40:10), lo que a juicio de esta Sala implica que tuviera contacto con las máquinas impregnadas y contaminadas con partículas de asbesto en el ejercicio de su labor de mecánico, y que antes de ello, tuvo contacto con tal sustancia en su labor de operario; no siendo posible perder de vista que según el dicho del precitado representante legal el asbesto está presente en el momento de hacer la mezcla y en el prensado donde el asbesto queda compactado y listo en la pieza sólida (min. 42:10), adicionalmente indica que en el proceso de prensado se utiliza el asbesto (Min.1:01:53) y que para ninguno de sus empleados efectuaban cotizaciones de alto riesgo por cuanto les suministraban todos los elementos de protección, considerando por ello que ningún empleado estaba expuesto a dicho material. En igual sentido, exalta la Sala que los dichos de los testigos traídos por la parte actora no ofrecen serios motivos de credibilidad, en tanto no se denota en ellos la espontaneidad requerida, a más de que, tal como lo indica el apoderado judicial de la empresa demandada, son sospechosos por tener interés directo en las resultas del proceso al encontrarse adelantando procesos similares en los que deprecian que se declare que estuvieron expuestos a la sustancia comprobadamente cancerígena del asbesto.

En relación con el testigo RAMÓN DE JESÚS MONSALVE (carp.01, doc. 27, min. 3:01:01), convocado al juicio a instancia de la parte demandada, tenemos que el mismo indica que la empresa MAFRICCION S.A. para la que labora, usó asbesto como materia prima hasta el año 2018, pues salió una Ley que prohibía el uso de asbesto a partir del año 2019; adicionalmente afirma que los trabajadores no estaban expuestos a esta sustancia, por cuanto la misma era almacenada en bodega aparte, los empleados contaban con todos los elementos de protección y la empresa es cuidadosa; no obstante también asiente que de la mezcla de la materia prima se desprenden partículas pero no por todos los lados de la empresa y los empleados que mezclan son únicamente dos, que están bien protegidos, precisando que las mezclas se hacen en las máquinas de prensado, mismas a las que el demandante le hacía el mantenimiento pero aclara que cuando este hacía el mantenimiento las máquinas estaban apagadas; luego cae en una ostensible contradicción cuando el apoderado judicial de la parte demandada lo interroga, pues afirma que las mezclas se hacen en la bodega en lugar alejado de la planta de producción y llegan en canecas a las prensas; dicho del que se logra extraer que en efecto la empresa demandada utilizaba como materia prima en su proceso productivo el asbesto y aunque se pretende hacer ver que solo los empleados de mezclado tenían contacto con el asbesto, ello no es concordante con su dicho inicial, ni con lo expresado por la representante legal del ente societario demandado, en relación con que el asbesto también era manipulado en el área de planta, específicamente en la parte o área de prensado.

Igualmente se resalta que, en respuesta al oficio remitido por el juzgado de instancia (carp.01, doc. 16), la ARL SURA manifestó que es a la empresa a quien le corresponde realizar los análisis de los puestos de trabajo y, si bien realizaron estudio de exposición al asbesto a algunos puestos dentro de las instalaciones de la demandada, al puesto del demandante no se le realizó, sin que obren en el plenario tales estudios realizados por la sociedad demandada, la que únicamente aportó constancia de cumplimiento con medidas ambientales externas, brillando por su ausencia la investigación en torno a los puestos de trabajo de sus empleados.

Conforme con el material probatorio recabado, se tiene por demostrado que el demandante en razón de las funciones realizadas en el ejercicio de actividad laboral, estuvo en contacto con el asbesto al menos hasta el año 2018, sin que la empresa demandada hubiese acreditado, siendo su obligación ineludible, que la exposición y el grado de la misma al asbesto a la que se encontraba sometido el demandante, se halla dentro de los límites permitidos; a más de que no resulta de recibo la aserción de que ningún empleado estaba expuesto a la sustancia, en razón a que se les brindaban los elementos de protección de seguridad industrial, pues cumplir con tal obligación, no elimina el alto riesgo de exposición ni menos contaminación en el ejercicio de la actividad de alto riesgo.

Finalmente, respecto del argumento de refutación de MAFRICCION S.A., relativo a que el Decreto 2090 de 2003 no se encuentra vigente, en tanto el Decreto 2655 de 2014, que prorrogó la vigencia del primero, fue derogado por el Decreto 1650 de 2014, pues resulta materialmente imposible tal derogatoria, en tanto el primero data del 17 de diciembre de 2014, mientras que el segundo es del 02 septiembre del mismo año, no siendo posible que una norma anterior, derogue a una posterior y por tanto la mentada derogatoria únicamente obedece a un error en la transcripción normativa.

Consecuente a ello, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en tanto, con acierto declaró que el demandante efectuó su labor, expuesto a la sustancia comprobadamente cancerígena del asbesto, y por ende, ejerció una actividad de alto riesgo.

2.3.2. La cotización especial para las actividades de alto riesgo

En el artículo 3º del Decreto 2090 de 2003 se estableció que los trabajadores que hubieren ejercido trabajos que impliquen exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, por más de 700 semanas, sean estas continuas o discontinuas, tienen derecho a la pensión especial de vejez, a una edad más temprana, por haber estado expuestos a un mayor riesgo que el resto de la población económicamente activa en el desempeño de su trabajo, y que con el fin de garantizar la sostenibilidad y estabilidad financiera del sistema integral de seguridad social en pensiones, se estableció una cotización especial, correspondiente al monto previsto en la Ley 100 de 1993, más 6 puntos adicionales, en vigencia del Decreto 1281 de 1991, y/o 10 puntos adicionales, en vigencia del Decreto 2093 de 2003, los cuales se encuentran exclusivamente a cargo del empleador (artículo 5º de los Decretos 1281 de 1991 y 2093 de 2003).

Con relación al aporte adicional, la jurisprudencia constitucional y laboral enseña que el trabajador puede sufrir las consecuencias adversas que se derivan del impago o del retraso en el que incurra el empleador, respecto de la obligación que le asiste de pagar el porcentaje adicional, y que la entidad administradora a la que se encuentre afiliado el trabajador, “... debe asumir la obligación pensional, no pudiendo excusarse en la omisión de las distintas empresas [...], ni en la suya, porque la legislación nacional le ha otorgado diversos mecanismos para proceder a cobrarle al empleador sus obligaciones incumplidas” (C-177 de 1998, T-280 de 2012, T-315 de 2015). La Corte Constitucional adoptó tal criterio al considerar que, en aras de la obtención de la pensión especial, la posibilidad de regresar al régimen público de pensiones desde el régimen privado no tenía eficacia, por cuanto lo ahorrado en la cuenta individual era inferior al valor de los aportes legales correspondientes al régimen

administrado por Colpensiones, en contravía de lo señalado en la sentencia C-789 de 2002; pero que tal dificultad era salvable, si se armonizaba el derecho a acceder a una pensión con la conservación de la sostenibilidad financiera del sistema, otorgando al interesado la oportunidad de aportar voluntariamente los recursos necesarios para igualar aquellas sumas requeridas.

A su turno, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia refirió que “... la obligación de cotizar el 10% adicional de que trata el artículo 5° del Decreto 2090 de 2003 para ese riesgo especial, no radica en cabeza del trabajador demandante, por cuanto aquella está a cargo del empleador [...] Por consiguiente, si el empleador no cubre a tiempo esa cotización especial, tal proceder no puede perjudicar al afiliado promotor del proceso, y por ende el ISS debe asumir la obligación pensional, quedando desde luego una relación por resolver entre la entidad de seguridad social y el responsable de la cotización, con respecto a lo que se quede debiendo por concepto del aporte adicional”. (CSJ SL del 22-07-2008, radicado 34270; SL del 31-08-2010; radicado 37863, SL-14388 del 20-10-2015, radicado 43182)

Ahora bien, el artículo 9° estatuyó que los trabajadores dedicados a las labores de alto riesgo, y que estuvieran afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, “... deberán trasladarse al Régimen de Prima Media con Prestación Definida en un plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto [28 de julio de 2003]. En este caso no será necesario que hubieren cumplido el término de permanencia de que trata el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993”, disposición que fue declarada condicionalmente exequible en la Sentencia C-030-2009, en el entendido de que “...el plazo de tres meses se contará a partir de la comunicación de la presente sentencia”, y que “.... la persona que ejerza la opción, puede aportar voluntariamente los recursos adicionales necesarios en el evento de que el ahorro en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso de que hubieren permanecido en el régimen de prima media”.

En torno de este tema, y al resolver de manera solvente la controversia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, arribó a las siguientes conclusiones: “(i) la pensión especial por actividades de alto riesgo regulada en el Decreto 2090 de 2003 es exclusiva del régimen de prima media con prestación definida, e implica para su causación, entre otros requisitos, el pago de cotizaciones adicionales especiales; (ii) por lo anterior, si el trabajador expuesto a condiciones que ponen en riesgo su salud, se traslada al régimen de ahorro individual con solidaridad, su empleador no se obliga al pago de los mencionados aportes adicionales, y (iii) si, después, el trabajador pretende acceder a las prestaciones reguladas en el Decreto 2090 de 2003, puede regresar al régimen de prima media con prestación definida

con todo lo ahorrado en el fondo privado, pero como este no puede ser inferior al monto total del aporte legal de haber permanecido en Colpensiones (C-789 de 2002), debe permitírsele realizar el traslado con el pago a su cargo de las cotizaciones adicionales generadas por las actividades de alto riesgo, dentro del plazo señalado en sentencia C-030 de 2009 (3 meses a su publicación 28/01/2009)" (CSJ SL-2555 del 01-07-2020, radicado 79733, CSJ SL-4072 del 30-09-2020, radicado 82815).

Desde ese horizonte, habiendo el demandante desarrollado una actividad de alto riesgo al servicio de la sociedad demandada, debe indicarse que MAFRICCION S.A., únicamente estaba obligada a realizar el pago de los porcentajes adicionales a las cotizaciones por los periodos comprendidos entre el 23 de junio de 1994 (fecha en la que surge la obligación de cotizar el porcentaje adicional – Decreto 1281 de 1994-) y el 28 de julio de 2003 (fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003 que restringió la cotización especial al RPMPD) y entre el 01 de marzo de 2015 (fecha de regreso al RPMPD según se extrae de la historia laboral) y el 30 de diciembre de 2018 (fecha en la que se aduce que la empresa comenzó con la producción plena de asbesto free), sin que exista obligación de pagar porcentaje adicional de la cotización, entre el 29 de julio de 2003 y el 30 de febrero de 2015, puesto que el demandante según se desprende de su historia laboral (carp.01, sub carp.04), se encontraba afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, en el cual, se itera, no existe la prestación de pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo.

Con fundamento en lo anterior, habrá de modificarse la sentencia de instancia en tal aspecto, ordenando el pago del porcentaje adicional de la cotización, únicamente por los lapsos del 23 de junio de 1994 al 28 de julio de 2003 y del 01 de marzo de 2015 al 30 de diciembre de 2018.

2.3.3. La pensión de vejez

El Sistema Integral de Seguridad Social es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de ciertas condiciones para tener calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad (preámbulo de la Ley 100 de 1993); y dentro de ese contexto, el Sistema General de Pensiones fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica periódica pensional, asumida por la

entidad administradora de fondos de pensiones del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Los afiliados al régimen de prima media con prestación definida que pretendan acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, deben acreditar, desde el año 2014, una edad mínima de 57 años, las mujeres, o de 62 años, los hombres, y desde el año 2015, una densidad cotizacional igual o superior a las 1.300 semanas (artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003); sin embargo, los afiliados que para el 01 de abril de 1994, contaban con 15 años de servicios, 750 semanas cotizadas, o 35 años, de ser mujeres, o 40 años, de ser hombres, podían pensionarse con el número de semanas y el monto o tasa de reemplazo descritos en el régimen anterior (artículo 36 de la Ley 100 de 1993), beneficio transicional que solo se extendió hasta el 31 de julio de 2010, salvo para los beneficiarios que, para el 29 de julio de 2005, hubieren cotizado 750 semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, para quienes el régimen de transición se mantuvo vigente hasta el 31 de diciembre del año 2014 (parágrafo transitorio 4º del Acto Legislativo 001 de 2005).

Con el fin de zanjar este aspecto de la controversia, se relievra que en el *sub iudice* se encuentra plenamente acreditado que, para el 01 de abril de 1994, el señor OSCAR DARÍO GIRALDO MEJÍA solo contaba con 29 años de edad, puesto que nació el 01 de noviembre de 1964 (carp.01, doc.03, pág. 73 a 74), y solo había cotizado 495,42 semanas (3.467,94 días); así las cosas, y para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, *ab initio*, el actor tendría que acreditar los requisitos mínimos del régimen general, siendo evidente que solo arribará a los 62 años de edad, el 01 de noviembre de 2026, pues se reitera, nació el mismo día y mes del año 1964 (carp.01, doc.03, pág. 73 a 74)).

2.3.4. La pensión especial por trabajo en actividades de alto riesgo

El Decreto 758 de 1994 estableció que, respecto de los requisitos consagrados para la prestación económica ordinaria, la edad para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo para la salud, se disminuye en 1 año por cada 50 semanas de cotización acreditadas con posterioridad a las primeras 750 semanas cotizadas en forma continua o discontinua en la misma actividad (artículo 15); empero, se debe resaltar que los requisitos para acceder a dicha prestación especial fueron modificados por el Decreto 1281 de 1994, normativa que estableció un régimen de transición en favor de las personas que al momento de entrar en vigor dicha preceptiva, que lo fue el 23 de junio de 1994, tuvieran 35 años de edad, si son mujeres, o 40 años de edad si son hombres, o 15 años de servicios cotizados (artículo 8º).

Posteriormente, el Decreto 2090 de 2003 modificó nuevamente los requisitos para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, mismo que estableció un régimen de transición para los afiliados que, al momento de la entrada en vigencia de la norma, que lo fue el 28 de julio de 2003, hubieren acumulado 500 semanas de cotización en actividades de alto riesgo (artículo 6º), siendo oportuno destacar que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia precisó que, tratándose de la transición pensional entre el Decreto 2090 de 2003 y el Decreto 1281 de 1994, el único requisito que se exige a los afiliados para preservar el citado régimen transicional, es haber cotizado las 500 semanas a las que hace referencia el inciso 1º del artículo 6º del Decreto 2090 de 2003, en tanto, *"... la exigencia que establece el parágrafo del mismo precepto, de cumplir también los requisitos para la transición de la prestación ordinaria [artículo 36 de la Ley 100 de 1993], es desproporcionada y contraria a la finalidad de la prestación, interpretación que en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, es más adecuada con el propósito teleológico de la normativa"* (CSJ SL1353-2019, radicación 69105, SL1280-2020, radicación 68688, SL4330-2021, radicación 54332).

Así pues, se encuentra acreditado dentro del plenario que, para el 28 de julio de 2003, el señor OSCAR DARÍO GIRALDO MEJÍA tenía 969,71 semanas cotizadas (6.787,97 días), de las cuales, 958,13 semanas (6.706,97 días) lo fueron en actividades de alto riesgo para la salud, exclusivamente al servicio de MAFRICCION S.A, esto es, más de las 500 semanas que exige la normatividad en cita, de modo que, al acreditar el número mínimo de semanas exigidas en el régimen general de pensiones, tendría derecho a que se le reconozca la pensión especial de vejez, en los términos y condiciones establecidos en el Decreto 1281 de 1994, sin que le asista el derecho a beneficiarse del régimen de transición previsto en el artículo 8º de la mismo cuerpo normativo, el cual exigía 40 años de edad y 15 años de servicios cotizados para el 23 de junio de 1994, toda vez que, para dicha calenda, solo contaba con 29 años de edad, y 507,42 semanas (3.551,94 días). Consecuentemente con lo anterior, la Sala concluye que el derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez reclamado por el actor, se rige por las disposiciones del Decreto 1281 de 1994, como acertadamente lo consideró el cognoscente de primera instancia.

Corolario de lo expuesto, se tiene que, para hacerse acreedor del derecho al reconocimiento de la pensión especial de vejez, el señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA tendría que (i) haberse dedicado en forma permanente, y por lo menos durante 500 semanas, continuas o discontinuas, al ejercicio de actividades de alto riesgo para la salud (artículo 2º del Decreto 1281 de 1994), (ii) haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas (numeral 1º del artículo 3º del Decreto 1281 de 1994), y (iii) haber cumplido 55 años, edad que se disminuirá 1 año por cada 60 semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1.000 semanas, sin que la edad

de pensión pueda ser inferior a los 50 años (numeral 2º del artículo 3º del Decreto 1281 de 1994).

Así las cosas, resulta claro que señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA cuenta con 1.775,7, semanas cotizadas (12.430 días), de las cuales, 1.172,4 (8.206,8 días), se cotizaron en el ejercicio de actividades de alto riesgo para la salud; pues no podrán acreditarse como semanas cotizadas en alto riesgo los periodos laborados para PROTEMPORE, los cotizados con posterioridad a diciembre de 2018 y los cotizados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, por estar excluida la prestación pretensa para dicho régimen, de acuerdo con el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003, es decir, no podrán tenerse como semanas cotizadas en actividades de alto riesgo un total de 603,3 (4.223 días), cumpliendo con ello los requisitos previstos en el artículo 2º del Decreto 1281 de 1994, haberse dedicado de forma permanente, y durante 500 semanas, al ejercicio de actividades de alto riesgo para la salud, y en el numeral 1º del artículo 3º del Decreto 1281 de 1994, al haber cotizado un mínimo de 1.000 semanas.

Finalmente, y en relación con el requisito de la edad mínima para acceder al reconocimiento de la pensión especial de vejez, conviene señalar que el señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA nació el 01 de noviembre de 1964 (carp.01, doc.03, pág. 73 a a74) y que 01 de noviembre de 2019, cuando arribó a los 55 años de edad, había cotizado 1.172,4 (8.206,8 días), en el ejercicio de actividades de alto riesgo para la salud, esto es, 172,4 semanas adicionales a las 1000 exigidas, suficientes para que la edad mínima se disminuyera hasta los 53 años, en razón de 1 año, por cada 60 semanas de cotización adicional ($172,4/60=2,8$). En consonancia con lo dicho, se colige que el actor causó el derecho al reconocimiento de la prestación desde el 01 de enero de 2018, data para la cual contaba con 53 años de edad y 1120 semanas, y por tanto, habrá de modificarse en este aspecto la sentencia recurrida en apelación.

2.3.4.1. Del disfrute de la pensión especial de vejez: Ahora bien, para definir los aspectos no regulados por el Decreto 1281 de 1994, lo procedente es aplicar las normas generales contenidas en la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos (artículo 13 ibíd.), de lo que se educa que, para disfrutar de la pensión de vejez, además de acreditar los requisitos de edad y tiempo de cotización, se exige la desafiliación al Sistema General de Pensiones (artículos 13 y 36 del Decreto 758 de 1990); lo que no obsta para que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia haya puntualizado que *"... cuando la permanencia del afiliado en el sistema de pensiones, obedece a la exigencia proveniente de la negativa equivocada del ente de seguridad social a conceder un derecho que ya estaba causado a la fecha de la solicitud, la prestación debe ser reconocida desde la fecha en que elevó la petición, si ya cumplía las exigencias legales"* (CSJ SL del 01-09-2009, radicado 34514, reiterada en SL del 22-

02-2011, radicado 39391, SL del 15-05-2012, radicado 37798, SL-5603 del 06-04-2016, radicado 47236, SL-2760 del 29-07-2020, radicado 77287, SL-5183 del 08-09-2021, radicado 73816).

No obstante, al señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA, luego de su reclamación no le fue negada la prestación económica, sino que fue requerido a propósito de aducir unos elementos probatorios documentales para determinar si en efecto se desempeñaba en una actividad de alto riesgo, sin que obre prueba en el plenario de que los mismos se hubieran aportado a efectos de que la entidad procediera a expedir una resolución mediante la cual negará la prestación; de suerte que, la para la Sala no es dable suponer que el demandante continuó cotizando por haber sido inducido a error por la entidad de seguridad social demandada, y de consiguiente, habrá de confirmarse la sentencia de instancia, en tanto ordenó el disfrute de la pensión a partir de la última cotización que registre el demandante.

2.3.4.2. De la liquidación de la pensión especial de vejez: La pensión especial de vejez por trabajo en actividades de alto riesgo (artículo 13 del Decreto 1281 de 1994), al igual que la pensión de vejez ordinaria, se liquida teniendo en cuenta el promedio de los salarios que sirvieron como base de cotización durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o el de toda la vida, según resulte más favorable (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), suma a la que debe aplicársele como tasa de reemplazo un monto que oscila entre el 55% y 65% del ingreso base de liquidación del afiliado, en forma decreciente, en función de su nivel de ingresos, y el cual se obtiene luego de despejar la fórmula " $r=65.50-0.50s$ ", donde " r " es el porcentaje del ingreso de liquidación, y " s " es el número de salarios mínimos legales mensuales vigentes, y que se incrementa en 1.5%, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, sin que el valor total de la pensión pueda ser superior al 80% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima legal (artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de 2003).

Sin embargo, teniendo en cuenta que la historia laboral allegada por COLPENSIONES al proceso no se encuentra actualizada y por tanto no es posible predicar cuándo se efectuó la última cotización por parte del litigioso por activa, habrá de confirmarse la sentencia de primera instancia en este aspecto para que COLPENSIONES proceda al reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, a partir de la última cotización reportada por el demandante y calculando el IBL en los términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993, con el procedimiento que le sea más favorable y el monto que corresponda, y en aplicación de la fórmula contemplada en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta 13 mesadas pensionales al año, conforme lo dispuesto por el Acto Legislativo 01 de 2005.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere recibido durante el periodo reportado, normativa con base en la cual COLPENSIONES E.I.C.E. está autorizada para descontar del retroactivo pensional al que hubiere lugar, el porcentaje correspondiente para sufragar los aportes para el sub-sistema General de Salud, aspecto sobre el que se adicionará la sentencia que re revisa bajo el grado jurisdiccional de consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E.

Finalmente, se condenará al pago de la indexación del retroactivo a que hubiere lugar por pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, como quiera que la devaluación de la moneda constituye un hecho notorio en el mercado monetario colombiano, siendo que las sumas materia de retroactivo pensional no ingresarán inmediatamente al patrimonio del demandante, y cuando lo hagan se verán menguadas por la devaluación de la moneda; razón por la cual, procede su reconocimiento, máxime cuando se trata de obligaciones propias del sistema de seguridad social que tiene un notorio carácter alimentario (CSJ SL 11818 de 1999, reiterada entre otras por la sentencia SL 54806 de 2013.)

2.3.5. De los perjuicios irrogados

En este aspecto debe señalar la Sala que la reparación de perjuicios exige la coexistencia de tres requisitos a saber: a) la ocurrencia del hecho dañoso, b) la culpa del empleador suficientemente comprobada, y c) el nexo de causalidad, frente a lo cual habrá de indicarse que, si bien el empleador sin justificación alguna incumplió la obligación de efectuar el pago del porcentaje adicional por la actividad de alto riesgo, no resulta cierto que el demandante tuviera derecho a la pensión desde el 01 de noviembre de 2014, pues para tal data el demandante se encontraba afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, régimen dentro del cual no se consagró la prestación reclamada y en virtud de la cual se reclaman los perjuicios, así mismo, se encuentra que la omisión de MAFRICCION S.A, no generó el daño proclamado por la parte actora de la pérdida del derecho a la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo, pues contrario a ello, en desarrollo del proceso se dispuso por parte de Colpensiones el reconocimiento y pago de tal prestación.

Así pues, no hay lugar a la indemnización reclamada en consideración a que no se configuran los tres presupuestos para que proceda la reparación de perjuicios, pues no fueron acreditados, esto es, no se demostró la ocurrencia de perjuicios materiales, puesto que la prestación económica fue ordenada a cargo de la entidad de seguridad social, amén de que no obra prueba siquiera sumaria de que se hubieren causado perjuicios morales.

Como colofón de lo todo lo expuesto, habrá de impartirse confirmación en este aspecto al fallo de instancia, en tanto que con suficiente asidero absolvió de los perjuicios reclamados a la sociedad demandada MAFRICCION S.A.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 365 del CGP, no se impondrán costas en esta instancia a cargo de los apelantes, considerando que el recurso de apelación impetrado alcanzó prosperidad parcial para cada uno de ellos, a la vez de que la sentencia confutada se analizó integralmente en favor de Colpensiones en sede del grado jurisdiccional de consulta. Las costas de la primera instancia serán confirmadas.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR los numerales primero y segundo de la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021, por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por OSCAR DARIO GIRALDO MEJIA en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y MAFRICCION S.A., los cuales quedarán del siguiente tenor literal:

***"PRIMERO:** DECLARAR que las labores desempeñadas por el señor OSCAR DARIO GIRALDO MEJÍA, identificado con C.C. 71.659.178, para la sociedad MAFRICCION S.A, durante los periodos comprendidos entre el 18 de junio de 1984 al 28 de julio de 1987 y del 28 de enero de 1988 al 30 de diciembre de 2018, fueron actividades de alto riesgo y, en consecuencia, se ordena a la demandada MAFRICCION S.A. a que pague los puntos adicionales de cotización con ocasión de la vinculación laboral que tuvo el señor OSCAR DARÍO GIRALDO MEJÍA para dichos periodos y como actividades de alto riesgo, así: 6 puntos adicionales por los periodos comprendido entre el 23 de junio de 1994 y el 25 de julio de 2003 y, 10 puntos adicionales, entre el 01 de marzo de 2015 y el 30 de diciembre de 2018.*

***SEGUNDO:** ORDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, a que reconozca y pague la pensión de vejez por actividad de alto riesgo en favor del demandante, debiendo además realizar el cálculo correspondiente, siendo que no obra en el plenario la historia laboral actualizada del actor, en punto a establecer el monto de la mesada pensional, indicando para ello que el demandante alcanzó el estatus de pensionado el 01 de enero de 2018 y que la pensión deberá reconocerse a partir del mes siguiente en que se haya reportado la última cotización en pensiones."*

SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia de fecha y origen conocidos, para autorizar a COLPENSIONES descontar del retroactivo pensional al que hubiere lugar, el porcentaje correspondiente para sufragar los aportes para el Sub-sistema General de Salud; igualmente se adiciona en el sentido de ordenar a COLPENSIONES E.I.C.E. a pagar las mesadas pensionales adeudadas, debidamente indexadas.


TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la providencia venida en apelación en consulta, de fecha y origen conocidos.

CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia. Las costas de la primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**, acogiendo el criterio de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vertido en el auto AL-2550 del 23-06-2021, radicado 89.628, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia de lo decidido en la Secretaría de la Sala, previa anotación en el registro respectivo, y **DEVUÉLVASE** el expediente al juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
Magistrado


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario